

República de Honduras, C. A.

**CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD Y DERECHOS
ADQUIRIDOS EN LAS ZONAS DELIMITADAS POR LA
SENTENCIA DE LA CORTEINTERNACIONAL DE JUSTICIA
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992.**

REVIDADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.- 28,905 DEL DIA JUEVES 1 DE JULIO DE 1,999.

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No.95-99

EL CONGRESO NACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Ratificar en todas y cada una de sus partes el Decreto No.88-98 de fecha 2 de abril de mil novecientos noventa y ocho, que literalmente dice:

"DECRETO No.88-98. EL CONGRESO NACIONAL, CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en el Artículo 9, inciso 3), incorporó el Tratado General de Paz, suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, al definir los límites del territorio nacional con la República de El Salvador en la forma establecida por dicho Tratado y previo, asimismo, los mecanismos mediante los cuales se determinarían los límites de las secciones que quedaban pendientes de delimitación.

CONSIDERANDO: Que el citado Tratado General de paz en su Artículo 43, específicamente dispone: "Cada Parte se obliga, en relación con los nacionales con la otra, a respetar y proteger los derechos y libertades esenciales de la persona humana, a garantizar su libre y pleno ejercicio y a velar porque no se violen o conculquen por autoridades, funcionarios o particulares". Que igualmente su Artículo 45 literalmente dispone: "Dentro de los propósitos centroamericanistas que animan a las partes, éstas se obligan a que sus respectivas legislaciones internas propicien el máximo respeto a los derechos humanos de los nacionales de ambas Partes y de manera especial a los derechos a la vida, la seguridad personal, la libertad, propiedad y la integridad de la familia".

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de los Artículos antes transcritos del Tratado General de Paz citado, el 31 de julio de 1986, los señores José Napoleón

Duarte, Presidente de la República de El Salvador y José Simón Azcona Hoyo, Presidente de la República de Honduras, emitieron una declaración conjunta en la que, entre otros temas, reafirmaron su determinación de "cumplir fielmente con los términos del Tratado General de Paz de Lima, Perú, convencidos de que la norma de derecho internacional es la que preserva y consolida la permanente fraternidad y cooperación constructiva entre ambos países para trabajar y progresar" y reafirmaron "el compromiso para someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, la controversia limítrofe entre ambos países, obligándose a ejecutar en todo, y con entera y buena fe la Sentencia que dicte ese Tribunal", además, para mantener el respeto a la dignidad de ambos Estados y de sus nacionales, estuvieron de acuerdo en la oportuna creación de una Comisión Especial, que estudie y proponga soluciones a los problemas humanos, civiles y económicos que pudiera afectar a sus con nacionales una vez resuelto el problema limítrofe. Dicha Declaración fue invocada por el Gobierno de Honduras en la réplica presentada ante la Corte Internacional de Justicia el 12 de enero de 1990; además, fue reiterada por el Agente Representante de Honduras ante el mismo tribunal, Abogado Ramón Valladares Soto, en la última exposición hecha en audiencia pública de la Sala de Dicha Corte el día 14 de junio de 1991, cuando expresó: "El Gobierno de Honduras está consciente del hecho que, en bien de lo que conviene a la humanidad, tiene que preocuparse por el bienestar de la población que actualmente habita estos territorios. Yo puedo confirmar a la Corte el compromiso del Gobierno hondureño de respetar la dignidad de todos los hombres que vivan en esos sectores, hondureños o Salvadoreños; la protección de sus derechos fundamentales y su bienestar social serán siempre objeto de superior consideración a tenerse en cuenta por parte de mi Gobierno después que la Sentencia de la Corte, haya sido dictada. Es precisamente por esa razón que el Presidente Duarte de El Salvador y el Presidente Azcona de Honduras, suscribieron el 31 de julio de 1986, una Declaración Conjunta, en la cual después de comprometerse a cumplir de buena fe la Sentencia que sea dictada por la Corte, estuvieron de acuerdo en : "La oportuna creación de una Comisión Especial que estudie y proponga soluciones a los problemas humanos, civiles y económicos que pudieran afectar a sus con nacionales, una vez resuelto el problema limítrofe".

CONSIDERANDO: Que tales declaraciones fueron confirmadas, en iguales o similares términos, por los presidentes de ambas Repúblicas: señores Rafael Leonardo Callejas Romero, Presidente de la República de Honduras y Alfredo Cristiani, Presidente de la República de El Salvador, el 8 de noviembre de 1991 y el 29 de septiembre de 1992, así como, por los señores Carlos Roberto Reina Idiaquez, Presidente de Honduras y Armando Calderón Sol, Presidente de El Salvador, en declaraciones del 10 de septiembre de 1994 y 2 de junio de 1995.

CONSIDERANDO: Que en aplicación del referido Tratado General de Paz, las Repúblicas de Honduras y El Salvador sometieron conjuntamente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la controversia existente entre ambos Estados, en las secciones limítrofes pendientes de limitación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad en lo dispuesto en los artículos 16, párrafo segundo y 18 de la Constitución de la República; y , el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, las disposiciones del Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador y entre éstas las contenidas en los

Artículos 43, 44 y 45 que obligan al respeto de los derechos humanos de los nacionales de las Partes y específicamente los derechos de nacionalidad y propiedad, deben cumplirse y aplicarse preferentemente a cualquier Ley del derecho interno.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 15, párrafo segundo de la Constitución de la República, Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional; en consecuencia, el Estado deviene obligado a darle cumplimiento y ejecución al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, por medio del cual se resolvió la controversia limítrofe existente entre Honduras y El Salvador.

CONSIDERANDO: Que la ejecución de la referida Sentencia plantea para ambos países situaciones que requieren situaciones jurídicas excepcionales, con relación a los problemas de nacionalidad y derechos adquiridos.

CONSIDERANDO: Que la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, es constitucionalmente obligatoria, en acatamiento del párrafo segundo del Artículo 15 de la Constitución de la República, que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional con todas las consecuencias que su ejecución conlleva.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, al ordenar en el párrafo final del inciso 3), del Artículo 9 de la misma, que en las Secciones pendientes de delimitación, debería estarse a los Artículos aplicables del Tratado General de Paz, del 30 de octubre de 1980, y que esos artículos del Tratado son con toda evidencia los que remiten a las Partes a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, Tribunal que delimitó en su Sentencia el 11 de septiembre de 1992, la línea divisoria en las porciones que estaban hasta entonces sin delimitar y que en consecuencia, esas porciones de líneas divisorias, son las que estaban previstas en la parte final del inciso 3), del Artículo 9 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: Que aunque el Artículo 107 de la Constitución de la República, prohíbe que los terrenos situados en la zona fronteriza a los Estados vecinos en una extensión de 40 Kilómetros hacia el interior del país, sean adquiridos o poseídos o tenidos, a cualquier título por personas que no sean hondureñas por nacimiento, de ninguna manera desconoce o destruye derechos ya adquiridos con anterioridad y con base en otra legislación, y que en consecuencia, de acuerdo con el Artículo 18 de la misma y con el Artículo 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, dicho Artículo 107 no obsta para el reconocimiento de los derechos adquiridos legítimamente en las zonas de territorio reconocidas a Honduras por dicha Sentencia.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con su historia legislativa, Honduras siempre ha dado muestras de resolver con espíritu centroamericanita y humanista los problemas derivados de la ejecución de sentencias arbitrales o resueltas por Tribunales Internacionales, tal como ocurrió cuando se aprobó el Decreto Legislativo No.27 de fecha 4 de febrero de 1907, en el que se establecieron criterios para resolver problemas derivados de la ejecución del Laudo que dictó su Majestad Don Alfonso XIII el 23 de diciembre de 1906, en el caso del problema limítrofe Honduras y Nicaragua.

De la misma manera, procedió cuando se suscribió el Protocolo del 21 de enero de 1931 por los señores Julián Irías y José Ángel Ulloa, el primero en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y el segundo como encargado de Negocios de Honduras en el mismo país, siempre relacionado con la ejecución del Laudo arbitral ya citado.

CONSIDERANDO: Que la República de Honduras y El Salvador han conformado sendas comisiones para demarcar conjunta y físicamente su frontera, en cuyo proceso se la logrado significativos avances y que ha sido suscrito un calendario de demarcación que deberá concluir en un plazo de doce meses a partir del 19 de enero de 1998.

CONSIDERANDO: Que no obstante, estar convencidos de la conveniencia, oportunidad y legalidad de la Convención que se ha sometido al conocimiento de este Congreso Nacional, es preciso revestir este acto de las más solemnes formalidades, a efecto que su aprobación no ofrezca la menor duda en su aplicación y que este acto se legitime con el rigor establecido en el Artículo 17 de la Constitución de la República, en el sentido que su aprobación se otorgue con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros que integran el Congreso Nacional, y en dos legislaturas sucesivas.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el párrafo 1), del Artículo 15 de la Constitución de la República, y conforme a los preceptos del Derecho Internacional, que respeta en esta materia la autonomía de la voluntad, es jurídicamente correcta la admisión del derecho de opción a la nacionalidad que se desee, ya sea Salvadoreña o Hondureña, en cuanto toca a las personas afectadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992.

POR TANTO:

DECRETA:

ARTICULO 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el ACUERDO No.2-DSL, emitido por el Presidente de la República de Honduras, Carlos Roberto Flores Facussé, el cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se remite al Congreso Nacional la "CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS EN LAS ZONAS DELIMITADAS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992"., suscritos por los Presidentes de Honduras y El Salvador en fecha 19 de enero de 1998, señores Carlos Roberto Reina Idiáquez y Armando Calderón Sol; que literalmente dice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. ACUERDO No.2-DSL. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. CONSIDERANDO: Que con fecha 19 de enero de 1998, los señores Presidentes de las Repúblicas de Honduras y El Salvador, suscribieron la "CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS EN LAS ZONAS DELIMITAS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERACIONAL DE JUSTICIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992", con el propósito de regular el tratamiento a dar en esas materias a las personas que hubiesen sido afectadas por la

referida sentencia.

CONSIDERANDO: Que para la expresada Convención entre en vigencia se requiere la aprobación, ratificación y canje de los instrumentos de ratificación de la misma por los Estados Partes de acuerdo a sus procedimientos constitucionales.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Soberano Congreso Nacional aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado.

POR TANTO,

ACUERDA:

Someter a consideración del Soberano Congreso Nacional, para los efectos de los Artículos 16 y 205, inciso 30) y 245, inciso 13) de la Constitución de la República, la "CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS EN LAS ZONAS DELIMITADAS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992", suscrita por los señores Presidentes de las Repúblicas de Honduras y El Salvador en representación de sus respectivos Gobiernos, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el día 19 de enero de 1998, cuyo texto es el siguiente:

"CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS EN LAS ZONAS DELIMITADAS POR LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992". PARTE EXPOSITIVA. INSPIRADOS, por el alto espíritu de cordialidad y hermandad con que ambos Estados suscribimos en la ciudad de Lima, República del Perú, el 30 de octubre de 1980, el Tratado General de Paz.

CONVENCIDOS, que la consolidación de la paz firme y duradera entre pueblos y gobiernos se logra a través del mutuo respeto y la protección de los derechos y libertades esenciales de la persona humana.

ANIMADOS, del más alto espíritu de amistad y confraternidad, en adhesión y respeto a los principios y normas del derecho internacional, de manera especial, lo relacionado con los Derechos Humanos internacionalmente protegidos consagrados en instrumentos regionales e internacionales, así como las obligaciones contenidas en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992.

CONSCIENTE, que la Sentencia en su párrafo 66) al prever de que algunas personas después delimitada la línea divisoria quedarían viviendo en territorio que antes estaba bajo la jurisdicción del otro Estado, expresando su plena confianza de que ambos Estados tomarían las medidas que fuesen necesarias para resolver los problemas derivados de tal situación, dentro de un marco de orden, de humanidad y total respeto a los derechos adquiridos. Con base en el Tratado General de Paz, en el párrafo 66) de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, las declaraciones presidenciales de El Salvador y Honduras de 1986, 1991, 1992, 1994 y 1995, y en la declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de Honduras y El Salvador, el 10 de septiembre de 1996, en lo que tengan

relación con el presente instrumento así como en los principios consagrados en Tratados Regionales e Internacionales de Derechos Humanos.

ACORDAMOS, suscribir la presente Convención.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Cada parte se obliga respetar los derechos y libertades de los nacionales de los dos Estados que quedaron viviendo o tuvieron derechos en los territorios de uno u otro Estado delimitados por las sentencias del 11 de septiembre de 1992 de la Corte Internacional de Justicia y de manera especial, a los derechos a la vida, seguridad personal, libertad, nacionalidad, propiedad, posesión y tenencia de la tierra, facilidad de circulación de personas y de bienes, integridad familiar y demás derechos adquiridos. También se obligan a garantizar el libre y pleno ejercicio de tales derechos y libertades y a velar porque no se violen o conculquen por autoridades, funcionarios, empleados públicos o particulares.

ARTICULO 2.- A fin de promover, estimular y facilitar la integración fronteriza, ambos Estados se comprometen en el marco de su legislación interna, a garantizar que los propietarios y habitantes de la zona transiten libremente en los territorios que fueron objeto de la Sentencia, y comercialicen y movilicen sus bienes en dichas zonas.

ARTÍCULO 3.- Ambos Estados se comprometen a respetar el derecho de opción de las personas en cuanto a nacionalidad se refiere, en los territorios delimitados por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, con pleno respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

ARTÍCULO 4.- Ambas partes se comprometen a garantizar la permanencia y estabilidad de los habitantes en las zonas delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

ARTICULO 5.- En lo referente al respeto a los derechos humanos, ambas Partes reafirman que ajustarán su conducta a los principios consagrados en el Capítulo VI, Título VII del Tratado General de Paz del 30 de octubre de 1980 y en los demás Convenios Internacionales y Regionales sobre esta materia en que ambos Estados sean parte.

CAPITULO II

DERECHOS ADQUIRIDOS

ARTÍCULO 6.- Ambas Partes reconocen que la noción de "Derechos Adquiridos" a que se refiere la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, comprende situaciones que ya tenían existencia y efectividad jurídica a la fecha de la Sentencia de la Corte. Los ordenamientos jurídicos de uno y de otro Estado reconocen la validez de los derechos a que se refiere el párrafo anterior y las partes se comprometen a respetarlos, independientemente de la nacionalidad de sus titulares.

Las partes convienen en que el traspaso de Soberanía de uno de los Estados en relación con el otro, no implica en forma alguna el desconocimiento de los derechos adquiridos por parte de los nacionales de uno de los Estados. El reconocimiento de derechos adquiridos implica que cada figura jurídica operada en uno de los países y que constituye derecho, se reconozca por el otro con el alcance y con el carácter con que se ha constituido, de modo que al que tenga propiedad, se le reconozca justamente eso; al que tenga posesión se le reconozca posesión con el tiempo transcurrido para cada caso y al que tenga tenencia se le reconozca tenencia. Lo acordado en materia de propiedad no elimina las expectativas de los poseedores en cuanto a sus derechos, dichas expectativas se mantienen inafectadas.

CAPITULO III

NACIONALIDAD

ARTICULO 7.- A las personas nacidas en los territorios de cada Estado delimitados por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, se les reconoce el derecho de optar a la nacionalidad salvadoreña u hondureña por nacimiento. A las personas que hubieren quedado viviendo en dichos territorios y que estén registrados en el Censo de Población, Vivienda y Propiedad ejecutado por la Comisión Técnica Especial de Censo El Salvador- Honduras, en las zonas delimitadas por la referida Sentencia, se les reconoce el derecho de optar a la nacionalidad Salvadoreña u Hondureña según lo establece la Constitución de cada Estado.

ARTICULO 8.- Los menores de dieciocho (18) años determinarán su nacionalidad dentro de los dos (2) años siguientes al cumplimiento de dicha edad, plazo dentro del cual podrán optar por la nacionalidad Salvadoreña u Hondureña. Mientras dichos menores no hicieren uso del derecho de opción, conservarán la nacionalidad de sus padres.

ARTÍCULO 9.- Los menores de padres ignorados mientras no puedan ejercer su derecho de opción y que se encuentren en territorio de cualquiera de los dos Estados, tendrán la nacionalidad por nacimiento del Estado donde residen.

ARTICULO 10.- Los nacionales de uno u otro Estado, para ejercer el derecho de opción que les corresponde, presentarán personalmente o por medio de su representante legal o apoderado, una solicitud a las gobernaciones políticas departamentales correspondientes, acompañada únicamente de la certificación de la partida de nacimiento y de la constancia de estar inscrito en el censo de población, vivienda y propiedad. La certificación de la partida de nacimiento deberá ser expedida gratuitamente por las autoridades correspondientes y autenticada, libre de derechos, solamente por los Ministerios de Relaciones Exteriores. Asimismo, dichos Ministerios extenderán la constancia de estar inscrito en el Censo de Población, Vivienda y Propiedad. Se podrán incluir en una misma solicitud las peticiones de dos o más personas. En caso que existiese diferencia en el nombre de las personas según su partida de nacimiento y los datos del censo, la autoridad municipal correspondiente hará constar que se trata de la misma persona. La solicitud deberá resolverse sin más trámite ni diligencia, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de su

presentación. Pasados los sesenta (60) días de la fecha de su presentación sin que haya resolución, se entenderá que ésta ha sido concedida. El Estado otorgante inscribirá de inmediato en los registros civiles o familiares correspondientes, la resolución que dicte en que se reconozca la nacionalidad. Siendo que la presente Convención regula una situación excepcional, en caso que las constituciones de las partes exijan determinados requisitos para poder optar a la otra nacionalidad, se entenderá que los peticionarios, con la sola presentación de la solicitud y los documentos a que se refiere el presente Artículo, cumplen con todas las formalidades legales exigidas.

ARTICULO 11.- Los nacionales de ambos Estados que a consecuencia de la sentencia hayan quedado en el territorio de uno u otro Estados, podrán conservar su residencia sin perjuicio de su derecho de nacionalidad, reconociéndose aquella con la constancia que expida la autoridad municipal correspondiente, conforme a los datos que consten en el Censo de Población, Vivienda y Propiedad.

CAPITULO IV

PROPIEDAD, POSESION, TENENCIA Y OTROS DERECHOS

ARTICULO 12.- Las partes reconocen, en los términos y con los alcances establecidos en la legislación bajo la cual fueron adquiridos los derechos de propiedad así como la posesión, tenencia y otros derechos sobre la tierra en los territorios delimitados por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, cuando hayan sido adquiridos por personas naturales o por personas jurídicas de derecho privado antes del 11 de septiembre de 1992. De igual manera reconocen, conforme a la legislación bajo la cual se obtuvieron los otros derechos adquiridos antes de esa fecha, sean reales o personales. Los reconocimientos que figuran en los párrafos que preceden, tendrán lugar sin tomar en cuenta la nacionalidad de los titulares de los derechos. A partir de la vigencia de la presente Convención, el ejercicio y la transferencia de los derechos reconocidos en los dos primeros párrafos de este Artículo, se regirán por las Leyes internas de cada Estado.

ARTICULO 13.- Cada Estado reconocen con la misma fuerza y valor que lo hace la legislación interna del Estado que los inscribió antes del 11 de septiembre de 1992, los títulos o instrumentos en que: A) Se constituyan, reconozcan, transfieran, modifiquen o cancelen el dominio o posesión; B) Se constituyan, transfieran, modifiquen o cancelen derechos de usufructo, herencia, uso, habitación o servidumbre sobre inmueble; C) Los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles cuando deban hacerse valer contra terceros; y, D) Aquellos en que se constituya, modifique, extinga o cancele algún derecho de hipoteca. Los títulos o instrumentos a que se refiere el presente Artículo, deberán inscribirse en el registro correspondiente del Estado que actualmente ejerce jurisdicción; y para hacerlo el interesado, apoderado o representante legal presentará certificación extendida por el registro donde fueron originalmente inscritos, únicamente autenticada gratuitamente por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos Estados. Si pasados tres (3) años desde la vigencia del presente Convenio, los interesados no han procedido a efectuar el registro de los títulos o instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, no podrán disponer jurídicamente de los mismos hasta tanto no efectúen dichos registros. Los Estados

deberán promover, incentivar y facilitar a los nacionales de uno y otro Estado que ejerzan ese derecho. Dentro del plazo de tres (3) años señalados en el presente Artículo la inscripción será gratuita. Los registradores de los respectivos Estados Partes procederán a inscribir en un plazo no mayor de treinta (30) días los títulos e instrumentos que amparan los derechos a que se refiere este Artículo.

ARTICULO 14.- Las Partes reconocen, conforme a la legislación del Estado en que se pidió el registro, los de prelación resultante de la presentación de títulos o instrumentos a los Registros de Propiedad de cada país, cuando la presentación se haya efectuado antes del 11 de septiembre de 1992, aún cuando el registro no se haya verificado. El Estado a que corresponda la jurisdicción, después de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, reconocerá el orden de presentación al registro que haya verificado la autoridad del otro Estado, el que se acreditará documentalmente en los términos y dentro del plazo indicado en el Artículo precedente.

ARTICULO 15.- La posesión irregular o la mera tenencia de la tierra que nacionales de una de las Partes se hallaren ejerciendo desde antes de la fecha de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en predios de propiedad particular, y que después de la Sentencia se encuentren en territorio del otro Estado, será normalizada por concurso de ambos Estados, correspondiendo al Estado de origen tomar todas las medidas que fuesen necesarias para lograr el traspaso de dominio a favor de los poseedores o tenedores y, al otro Estado lo concerniente a su legalización. La normalización de la posesión irregular o la mera tenencia exige como condición previa el acuerdo de los propietarios de los inmuebles, poseedores o tenedores y el Estado de origen mismo, para efectuar el traspaso a favor de los beneficiarios. Logrado el entendimiento anterior, se procederá al otorgamiento de los instrumentos respectivos de dominio, dentro del marco jurídico del Estado donde se encuentren los inmuebles, quedando exonerados los interesados del pago de los gastos notariales hasta su inscripción, que impliquen los instrumentos mencionados.

ARTICULO 16.- Tratándose de la posesión regular, ésta se reconoce por el tiempo transcurrido, tanto por el poseedor directamente o sumándole el tiempo que el bien hubiera sido poseído por aquel del que la hubiera legalmente adquirido, por acto entre vivos o por causa de muerte. Para tal efecto, se tendrán como pruebas los respectivos títulos expedidos por las autoridades competentes del Estado de origen y demás medios probatorios. Las certificaciones legalizadas de conformidad con este instrumento sobre procedimientos o diligencias encaminadas a titular en inscribir la posesión. Para el solo efecto de reconocer el status quo existente a la fecha de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, se estará a lo consignado en el Censo de Población, Vivienda y Propiedad. Ambas partes se comprometen a otorgar las facilidades para regularizar la posesión y propiedad y su correspondiente inscripción.

CAPITULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 17.- Ambas Partes acuerdan que las situaciones no previstas expresamente por esta Convención, surjan en los territorios delimitados por la

Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, en cuanto a la legislación aplicable a relaciones jurídicas, se resolverán por los tribunales competentes del Estado que tenga jurisdicción territorial, aplicando, si es el caso, las normas del derecho internacional privado.

ARTICULO 18.- Los contratos, actos jurídicos y hechos derivados de un derecho adquirido que se hubieren producido en el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1992 y la fecha de entrada en vigor de la presente Convención, se tomarán como válidos de conformidad al ordenamiento jurídico del país en el cual se realizaron los contratos, actos jurídicos y hechos derivados de un derecho adquirido, siempre que no contraríe las normas constitucionales del otro país en donde estén ubicados los bienes.

ARTICULO 19.- La transferencia de los derechos de propiedad y posesión por acto entre vivos y la transmisión por causa de muerte podrá ejercerse a favor de nacionales de uno u otro Estado que hayan nacido o se encuentren residiendo con base en el Censo de Población, Vivienda y propiedad y aquellos que residan legalmente en las zonas delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

CAPITULO VI

COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 20.- Ambos Estados, se comprometen al fiel cumplimiento de la presente Convención. En caso de diferencias o desacuerdos entre ellos sobre su interpretación o ejecución, procurarán encontrar las mejores soluciones por medio de la negociación directa, tomando en cuenta las relaciones de paz y hermandad entre los dos países.

CAPITULO VII

RATIFICACION Y VIGENCIA

ARTICULO 21.- La presente Convención será aprobada y ratificada por ambas Partes de acuerdo a sus procedimientos constitucionales y entrará en vigencia en la fecha del canje de los respectivos instrumentos de ratificación que tendrá lugar en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.

ARTICULO 22.- Una certificación de la presente Convención será depositada en la Secretaría General de las Naciones Unidas para los efectos del Artículo 102 de la Carta de esa Organización, y otra en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, EN FE DE LO CUAL, los Presidentes Constitucionales firmamos la presente Convención en dos ejemplares originales, en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho. POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, CARLOS

ROBERTO REINA IDIAQUEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL. POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, ARMANDO CALDERON SOL, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. (F) CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. (F) JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ, SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.

ARTICULO 2.- El presente Decreto deberá ser ratificado constitucionalmente en la próxima legislatura ordinaria y una vez ratificado entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dos días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho. RAFAEL PINEDA PONCE, PRESIDENTE. JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA, SECRETARIO, HERIBERTO FLORES LAGOS, SECRETARIO. Al Poder Ejecutivo. Por Tanto: Ejecútese. Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 1998. (F) CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. (F) EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES".

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA
Secretario

HERIBERTO FLORES LAGOS
Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio de 1999.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores.
ROBERTO FLORES BERMUDEZ

